

nificato e la portata dei nuovi dati normativi (art. 8 del Concordato madamense, Disegno di legge 1831/'87 della Camera dei deputati, Circolare del Ministero di Grazia e giustizia del 26/2/86, tutti riportati in Appendice —pp. 177-192—), ma ad un tempo «sforzarsi di cogliere le linee ispiratrici del nuovo sistema cercando di inserirle e metterle a confronto con il più generale atteggiamento che lo Stato sociale contemporaneo... tende ad assumere nei confronti del fenomeno religioso» (p. V; su questo tema di carattere più generale, peraltro, l'A. già ha avuto modo di soffermarsi diffusamente: *Stato sociale e fenomeno religioso*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 356).

Dopo una rapida panoramica sull'evoluzione del regime matrimoniale nell'ordinamento italiano (Cap. I, pp. 3-20) e lo studio del riconoscimento civile del matrimonio canonico (Cap. II, pp. 23-84), nonché dell'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (Cap. III, pp. 87-146; non possiamo, ovviamente soffermarci sulle singole interpretazioni che —a detta dello stesso A.— per «la mancanza di più specifiche disposizioni legislative —che avrebbero dovuto essere fornite da una nuova «legge matrimoniale»— sono forse non del tutto persuasive o risolutive dei diversi problemi», pp. V-VI), si espongono le riflessioni conclusive sul nuovo regime matrimoniale concordatario e la sua applicazione.

Esse non possono negare la tendenza, nata dalla legittima preoccupazione di armonizzare il sistema matrimoniale concordatario con i principi costituzionali, ma sospinta al di là da precise concezioni ideologico-politiche, di interpretare limitativamente la rilevanza del regime matrimoniale concordatario

e con esso del riconoscimento del matrimonio religioso cattolico.

Questa tendenza, se si inasprisse e affermasse più diffusamente di quanto già non lo fosse, oltre a procurare «un inadempimento da parte dello Stato di impegni formalmente assunti nei confronti della Chiesa», contrasterebbe con quella «massima disponibilità dell'ordinamento statale», che pure va affermandosi, «a recepire modelli disparati e personali di vita» (p. 151; si pensi alla rilevanza giuridica che si tende ad accordare alla famiglia di fatto o alla unione fra omosessuali).

Insomma, «la dottrina ecclesiasticistica» si mostra «ancora una volta, forse più di altre, incline a lasciarsi guidare da influenze di ordine ideologico e politico» (p. 91).

Scevro da condizionamenti ideologico-politici, invece, ci sembra questo lavoro; e anche per il contributo di obiettività che fornisce all'approfondimento di temi così disputati, merita di essere raccomandato alla lettura.

Chiude il volume l'utile indice degli autori citati.

LUIGI DEL GIUDICE

L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Giuffrè Editore, Milano 1991, 289 págs.

El profesor Navarro aborda en la primera parte del trabajo «el derecho de asociación de los fieles». Se trata de un derecho «formalizado», en el ordenamiento jurídico de la Iglesia, y que se apoya en las enseñanzas conciliares (cfr. «Apostolicam actuositatem»).

La Iglesia ha querido reconocerlo formalmente en el CIC de 1983, ya que se trata de un derecho exigido por la misma naturaleza humana (en virtud de la sociabilidad propia de la persona), que ha de encontrar su confirmación y perfección en el orden sobrenatural. Por otra parte su ejercicio manifiesta la responsabilidad que los fieles tienen en la edificación de la Iglesia.

En el CIC de 1917 tal derecho dependía más de la aprobación jerárquica que del acuerdo asociativo de los fieles (el estatuto de los fieles ante la jerarquía era de carácter pasivo, cfr. p. 10). Con la enseñanza conciliar se ha llegado a una nueva comprensión del derecho de asociación (cfr. «*Apostolicam actuositatem*», 19; «*Presbyterorum ordinis*», 8). Así, pues, concluye el profesor Navarro, «el fenómeno asociativo es fruto de las exigencias humanas y cristianas del fiel» (p. 12).

Por otra parte, los fieles son responsables en la misión de la Iglesia. En virtud del bautismo alcanzan la libertad de los hijos de Dios, integrando el Pueblo de Dios, lo cual origina derechos y deberes recíprocos. Para que puedan llevar a cabo su misión propia precisan del ejercicio de tal derecho, que no depende directa y esencialmente del reconocimiento que realice la autoridad eclesiástica, ya que radica en el mismo bautismo. Así lo exige también la naturaleza de la Iglesia como comunión de fieles en Cristo. Tal derecho de asociación se actúa por el principio de libertad (que engloba distintas dimensiones: obras de caridad, apostolado, búsqueda de la santidad según específicas espiritualidades), y por la autonomía de que goza el fiel cristiano.

Tal derecho no puede entenderse como si fuera una concesión de la jerarquía, ya que radica en el mismo bautismo. No obstante, la autoridad eclesiástica debe reconocerlo y tutelarlos. Su transgresión o violación dañaría «la condición constitucional del fiel», afectando gravemente a cuanto le corresponde a título de justicia (cfr. p. 17).

Más adelante desglosa el autor los elementos que integran el «contenido del derecho de asociación»: constitución de asociaciones y gobierno. Destaca que los actos de la autoridad no son necesarios para el nacimiento jurídico de una asociación (en el sentido de que determinen decisivamente su existencia, por tratarse de un derecho de los fieles, cfr. 19). Respecto al gobierno de dichas asociaciones señala que se determinará en virtud de la voluntad de los fieles, como ejercicio de su autonomía.

También trata de los límites de este derecho, y de los fines a que se dirige su actuación (caridad, piedad y fomento de la vocación cristiana en el mundo), quedando excluidos los fines temporales y aquellos que por su propia naturaleza están reservados a la autoridad eclesiástica (cfr. pp. 21-22). Las asociaciones de fieles deben mantener la debida relación con la jerarquía, estando sujetas a su vigilancia. Las asociaciones constituidas por la autoridad están bajo la «superior dirección» de ésta. En las creadas libremente por los fieles la vigilancia en lo que se refiere a la fe, a la moral y a la disciplina eclesiástica, y su dependencia respecto de la autoridad, no podrá transformarse en aquella dirección superior.

En la segunda parte del estudio se ocupa de las «asociaciones de fieles». Señala el acuerdo tomado por el Coe-

tus «De Laicis» en la formación del Código vigente de evitar la división cerrada de las asociaciones en atención a los fines (propia del anterior Código), para realizar una doble división globalizante: asociaciones públicas y privadas, que luego vendrán reguladas, en concreto, por los respectivos estatutos (cfr. p. 41).

Una vez asentado esto, el profesor Navarro inicia el estudio de las «asociaciones privadas de fieles». En primer lugar señala las características que las configuran: constitución libre por parte de los fieles; la jerarquía de diversos modos las reconoce y alaba, pudiendo conceder, por ley o decreto formal, la personalidad moral, sin que cambien de naturaleza; compete a los fieles en virtud del bautismo fijar sus diversos fines, espirituales o apostólicos; no reciben una «misión» ni actúan en nombre de la jerarquía; tienen estatutos propios, que son examinados por la autoridad; están sujetas a la jurisdicción ordinaria de los Pastores; y sus bienes no son eclesiásticos, sino que son regulados por las normas civiles (cfr. p. 43).

Después trata —con más detalle— de su constitución, gobierno, fines propios, miembros, tipos (asociaciones privadas sin personalidad jurídica y asociaciones privadas con personalidad jurídica) y funciones (cfr. pp. 43-133). Concluye afirmando que las asociaciones privadas constituyen el instrumento más representativo para el ejercicio del derecho de asociación que corresponde al fiel cristiano (cfr. p. 133).

A continuación se ocupa el autor de la cuestión de las «asociaciones públicas de fieles». Al igual que antes, primero enuclea sus características propias: son asociaciones erigidas por la autoridad como corporaciones de Derecho

Público; la misma jerarquía les asigna la misión canónica en cuanto que tales asociaciones presuponen una participación en la misión pastoral de la propia jerarquía; actúan en nombre de la jerarquía; en todo están sometidas al gobierno de los pastores y sus bienes tienen el carácter de bienes eclesiásticos (cfr. pp. 141-142).

Más adelante trata de la erección de las mismas, de su personalidad jurídica, finalidades y misión, significación del actuar «en nombre de la Iglesia», estatutos, miembros, tipos de asociaciones, función de la jerarquía en relación a ellas (cfr. pp. 141-210).

Por último, el profesor Navarro concluye su obra con un apéndice donde presenta el «iter» redaccional del canon 215 y de los cánones que tratan de las asociaciones de fieles (cfr. pp. 213-281).

PEDRO JESÚS LASANTA

Roland SCHEULEN, *Das Amt des «Vicarius Episcopalis». Ein Kirchenrechtlicher Beitrag zur Ämterstruktur in der Partikularkirche*, ed. Echter, Würzburg 1991, 1 vol. de 373 págs.

El estudio de Roland Scheulen constituye una nueva publicación de la reciente pero ya prestigiosa colección canónica *Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft*, dirigida por los profesores Hubert Müller (Bonn) y Rudolf Weigand (Würzburg). Se basa en la tesis doctoral elaborada por el autor en la Facultad de Teología católica de la Universidad de Bonn, que fue dirigida por el prof. Hubert Müller. El objeto del es-